

Patrimonio agroalimentario en Chile: Implicancias territoriales y oportunidades desde la política pública



Fecha de publicación: 29/11/2016

No cabe duda que en las últimas dos décadas, tanto en el contexto latinoamericano como en Chile, se han experimentado una serie de procesos vinculados a la patrimonialización de los componentes agroalimentarios de determinados grupos sociales y territorios, como respuesta a una serie de transformaciones políticas, socioeconómicas, culturales y ambientales que han incidido en el desarrollo de las comunidades principalmente de las zonas rurales, producto del proceso de globalización neoliberal ocurrido en los últimos treinta años (Kay, 2009).

En este sentido, han sido los Estados Nacionales, quienes tomando en consideración las acciones impulsadas por UNESCO (2003) o FAO (2002), sumado a los estudios teóricos-conceptuales asociadas a la nueva ruralidad (Giarraca, 2001; Perez, 2004; Gomez, 2002; de Grammont, 2004), es que el discurso vinculado a la patrimonialización de la cultura alimentaria, se ha convertido en una nueva oportunidad que les ha permitido, posicionarse como un actor clave en la generación de políticas públicas que estimulen el desarrollo económico de los espacios rurales.

Pese a ello, y a través de distintos enfoques, es que dichas acciones, más que apuntar a una efectiva conservación y resguardo de las culturas alimentarias, se han enfocado principalmente en las potencialidades económicas que este fenómeno puede generar en las comunidades rurales, desconsiderando en muchos casos, los riesgos y amenazas que esta situación puede generar.

En el caso de Chile, desde el año 2006 que se han venido impulsando acciones desde instituciones públicas vinculadas al sector agropecuario y cultural. En este sentido, se destaca la labor de la Fundación para la Innovación Agraria (FIA), quien a través del Programa de Innovación Estratégica en Patrimonio Alimentario, se ha encargado de elaborar la Serie Patrimonio Alimentario, consistente en la publicación de inventarios a nivel regional que pretenden promover la protección, conservación y puesta en valor del acervo cultural que encierran los productos y preparaciones distintivas de nuestros territorios (FIA, 2014). Por su parte, el Consejo Nacional de la Cultura (CNCA), mediante su colaboración con el proyecto "Desarrollo del Arca del Gusto en Chile: Bases para el Fomento del Turismo Culinario", ejecutado por la Universidad de Concepción en conjunto con Slow Food y la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas (ANAMURI), se encargó de publicar el Catálogo Alimentario Patrimonial: Productos tradicionales y en riesgo de extinción en Chile, consistente en una publicación que busca apoyar y difundir el desarrollo del turismo cultural culinario, presentándose como una herramienta que colabora con la apropiación y reconocimiento de las comunidades que deciden desarrollar un trabajo de estas características (CNCA, 2014).

Sin embargo, las principales acciones vinculadas a este tema, han estado marcadas a través de sistemas que buscan valorizar la producción agroalimentaria tradicional mediante la generación de mecanismos que permitan certificar la calidad y autenticidad del producto, a través de estrategias de diferenciación, enfocadas mayoritariamente, en mercados extraterritoriales. En este sentido, instancias como los concursos de valorización del Patrimonio Agroalimentario liderados por FIA, o los mecanismos de certificación mediante el programa Sello de Origen de INAPI, si bien buscan responder ante el creciente interés por el acceso a productos alimentarios con un alto valor identitario asociado a un territorio o comunidad en particular, lo cierto es que se encuentran incentivando procesos de patrimonialización asociados más que todo, a una reactivación económica de las economías locales, que a un efectivo resguardo de las culturas alimentarias.

Pese a que estas instancias se presentan como una gran oportunidad para las comunidades rurales de nuestro país, lo cierto es que no consideran la generación de escenarios complejos que repercuten en la fragmentación, modificación de usos y adaptación de los productos de alimentos considerados patrimoniales por parte de los propios grupos sociales (Espeitx, 2004). Un aspecto no menor, tiene relación con el mecanismo de financiamiento de estas iniciativas, promovidas a través de concursos públicos. Tomando como antecedente el concurso liderado por FIA, pese que durante estos tres años, se han logrado financiar cincuenta iniciativas, éstas corresponden sólo a un tercio del total de proyectos que postularon. No cabe duda que este mecanismo, claramente contribuye a la exclusión de aquellos grupos sociales que no cuentan con los recursos técnicos y humanos para emanar propuestas que sean atractivas para la institución que concede el financiamiento.

Otro aspecto crítico a mencionar, tiene relación con los procesos de certificación de productos asociados a un origen en particular. En este caso, se presenta lo ocurrido con la postulación del merkén de Nahuelbuta al programa Sello de Origen como indicación geográfica. Esta situación ha generado instancias de controversia por intentar conceder una certificación, por ende, un mayor valor agregado, a un producto que cuenta con un reconocimiento y apropiación por parte de todo el territorio y comunidades mapuches, y que no sólo se circunscriben específicamente a Nahuelbuta como lugar de procedencia. En la actualidad, este creciente modelo de producción/comercialización del merkén mapuche, según lo relata Sepúlveda Alcamá (2014), ha venido transgrediendo las formas ancestrales de producción campesina y mapuche, constituyéndose en una amenaza al saber patrimonial, el cual se sustenta principalmente en la oralidad.

De igual manera, considerando los impactos que ha generado el proceso de industrialización de la producción agroalimentaria a nivel mundial, amparado bajo el fenómeno de la Revolución Verde desde mitad del s. XX, y que han repercutido en la estandarización y mundialización de la dieta alimentaria (Espeitx, 2004), es que en las últimas décadas, se ha evidenciado una serie de tendencias vinculadas hacia un consumo responsable que pone énfasis en las relaciones de proximidad entre el productor y el consumidor. Instancias como el comercio justo o los circuitos cortos de comercialización (CCC) se presentan

fortaleciendo el capital social y reduciendo intermediaciones, distancias geográficas e impactos al medio ambiente (Ranab y Arosio, 2016).

Para el caso de nuestro país, en los últimos años es posible evidenciar importantes avances en materia de desarrollar políticas públicas sostenibles e inclusivas con los campesinos y pequeños productores de los espacios rurales. La labor que actualmente está cumpliendo el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) se reconoce como un buen aliado a futuro, que a través de sus Lineamientos Estratégicos para el período 2014-2018 justamente ha puesto énfasis en el fortalecer los circuitos cortos mediante diversas estrategias de comercialización, destacando el sistema de compras públicas institucionales, mediante un convenio establecido con la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB), institución encargada de la alimentación de las escuelas públicas del país, y que permitirán a partir del año 2017, implementar un sistema de CCC que permita los usuarios de INDAP, comercializar productos frescos de manera directa con las empresas encargadas del Programa de Alimentación Escolar, situación que no sólo permite beneficiar a los campesinos y pequeños productores que también contribuye a fomentar una alimentación saludable en la población escolar del mismo territorio. De igual manera instancias como las Tiendas Mundo Rural o las Expo Mundo Rural desarrolladas por esta institución, permiten a sus usuarios diversificar su producción en mercados dinámicos a nivel local, regional y nacional.

Sin embargo, un aspecto crucial a destacar por medio de estos lineamientos, es la importancia por fomentar el enfoque territorial en los procesos de planificación y gestión de su intervención, focalizando a su vez, programas y acciones en aspectos críticos que no estaban formando parte de la agenda pública y que se presentan como algunos de los problemas estructurales del espacio rural hoy en día, como es la importancia de la retención de población joven que se desempeña en labores agropecuarias, el apoyo a las mujeres que no sólo se vinculan a la producción agrícola, sino que desempeñan otras actividades propias del espacio rural, como es la artesanía, el turismo rural o la elaboración de alimentos procesados, la inclusión de los pueblos originarios, o el fomento a una producción agropecuaria sustentable y responsable con el medio ambiente, evitando el uso masivo de agroquímicos.

En este sentido, dicha institución, a través de un convenio de colaboración con RIMISP – Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural, ha desarrollado un trabajo articulado aplicado en la región del Maule, que permita facilitar y apoyar un proceso de desarrollo territorial centrado en la puesta en valor de la identidad y el patrimonio cultural y natural ligado a la Agricultura Familiar Campesina (AFC), fortaleciendo las capacidades de actores institucionales y territoriales para generar e instalar nuevos procesos y prácticas institucionales basadas en el enfoque territorial según las prioridades estratégicas de INDAP 2014-2018. A partir de este trabajo, se espera visibilizar las acciones impulsadas dentro del proceso de desarrollo territorial institucional, a través de acciones públicas que fortalezcan la articulación interinstitucional.

Dichas acciones, permiten proyectar al mediano plazo procesos de desarrollo en el espacio rural más inclusivos y territorialmente sostenibles con sus habitantes, sin embargo, se hace necesario seguir impulsando y fortaleciendo políticas públicas enfocadas en los espacios rurales a largo plazo, que trasciendan las voluntades políticas y los respectivos períodos de gobierno, a fin de evitar y reducir las incertidumbres sobre los impactos que genera el actual modelo agroexportador presente en nuestro país.

Carlos Pallacán es Asistente de investigación del Programa Desarrollo Territorial con Identidad Cultural del Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural (Rimisp), y geógrafo de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV), donde es docente y se desempeña en temáticas ligadas al desarrollo rural y organización campesina. Actualmente se encuentra terminando su proyecto de tesis del Magister en Desarrollo Rural de la Universidad Austral de Chile (UACH), con áreas de interés dentro de la geografía rural, planificación territorial rural y a las alternativas al desarrollo en torno a este espacio.

Este artículo se enmarca dentro de la serie colaborativa entre la Plataforma de Territorios Inteligentes y RIMISP, el Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural.